CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DEL MÍNIMO VITAL DE AGUA POTABLE EN MEDELLÍN, COLOMBIA

Pastor Jaramillo Jaramillo.

PhD © Ciencia Política, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Magíster en Ciencias Ambientales Universidad de Antioquia. Docente investigador del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín-Colombia. Correo electrónico: pjaramillo@elpoli.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7837-1707>.

Resumen

El objetivo de la presente investigación es analizar la política pública del mínimo vital de agua potable en la ciudad de Medellín, Colombia en el período 2011-2020. La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, analítico y descriptivo apoyado en información documental, lo que permitió verificar el real acceso al agua potable para comunidades humanas vulnerables que habitan por lo general en zonas consideradas de alto riesgo en las laderas de los barrios y comunas de la capital antioqueña. Igualmente permitió analizar los impactos de dicha política pública para el mejoramiento de la calidad de vida de dichas comunidades. El estudio encontró que si bien es cierto Medellín es pionera en el contexto colombiano con relación a la intención de implementar los lineamientos de política trazados desde el año 2002 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y por la Resolución N° 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2010, que consideraron el derecho al acceso al agua potable y al saneamiento básico como un derecho humano fundamental. En ese sentido, se evidenció mejora o mayor acceso al agua potable en comunidades vulnerables según datos de la Personería Municipal o Ministerio Público, al pasar de 24.694 hogares que representaron 147.165 personas beneficiadas en el año 2012, a 41.148 hogares representando un total de 195.995 personas beneficiadas en el año 2015. Sin embargo, dadas las limitantes como está diseñada la política (se exige al beneficiario que esté a paz y salvo con las empresas públicas y obviamente, que tenga redes de acueducto y alcantarillado en su vivienda) y la cantidad ilimitada de personas desplazadas por las violencias y el conflicto armado interno que vive Colombia, pareciera hacerse desbordado las expectativas o alcances de la citada política del mínimo vital de agua potable.

Palabras clave: agua potable, mínimo vital, población vulnerable, política pública.

ANALYSIS OF THE POLITIC OF MINIMUM VITAL POTABLE WATER IN MEDELLÍN, COLOMBIA

Abstract

The objective of this research is to analyze the public politic of the vital minimum of drinking water in the city of Medellín, Colombia in the period 2011-2020. The research was conducted under the quantitative, analytical and descriptive approach supported by documentary information, which allowed verifying the real access to drinking water for vulnerable human communities that generally live in areas considered at high risk on the slopes of the neighborhoods and communes of Antioquia. It also made it possible to analyze the impact of this public politic on the improvement of the quality of life of these communities. The study found that is true that Medellín is a pioneering in the Colombian context in relation to the intention to implement the politic guidelines outlined since 2002 by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights of the United Nations and by Resolution No. 64/292 of the General Assembly of the United Nations in 2010, which considered the right to access to safe drinking water and basic sanitation as a fundamental human right. It mean, there was evidence of improvement or greater access to drinking water in vulnerable communities according to data from the Municipal Personería or Public Ministry, going from 24,694 households representing 147,165 people benefited in 2012, to 41,148 households representing a total of 195,995 people benefited in 2015. However, given the limitations as the politic is designed (the beneficiary can't has debt with public companies and obviously, to have water and sewage networks in their homes) and given to the unlimited number of people displaced by violence and the internal armed conflict that Colombia is experiencing, the expectations of the aforementioned politic of minimum vital drinking water finished.

Keywords: public politic, minimum vital, drinking water, vulnerable population.

Identificación del proyecto

El capítulo corresponde al proyecto de investigación “Evaluación de la política pública del mínimo vital de agua potable en Colombia, 2011-2020”, articulado indirectamente a la Tesis Doctoral en Ciencias Políticas, por lo tanto, financiado por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en virtud de la comisión de estudios.

Introducción

El propósito general de la investigación es evaluar la política pública del mínimo vital de agua potable en Colombia, período 2011-2020, del cual se deriva el capítulo que está relacionado específicamente con el caso de la ciudad de Medellín que corresponde a un proceso investigativo que aún no ha concluido. Entre los objetivos específicos de la investigación están, analizar la cobertura del acceso real al agua potable y al saneamiento básico para las comuni-

dades humanas vulnerables del área de estudio; determinar la efectividad de la política pública del mínimo vital de agua potable y explorar las causas por las cuales dicha política limita el acceso al agua potable para las comunidades vulnerables contrariando lo acordado por el Estado Colombiano en la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2010 y en contravía de los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS-6, relacionado con “Agua limpia y saneamiento”.

La pregunta de investigación es ¿Cómo se viene implementando y qué resultados ha tenido durante la primera década, la implementación de los lineamientos de política internacional sobre agua limpia y saneamiento para todos, acordados en la asamblea general de la organización de las naciones unidas (ONU) de 2010 y diseñados en el ODS-6?

A manera de justificación y contexto problemático, se puede afirmar que la Constitución Nacional de Colombia de 1991 en su artículo 13, 365 y 366 garantiza a las personas en condición vulnerable su protección, así como contar con servicios domiciliarios y además del agua potable (Jaramillo, 2017 p. 252). Ahora bien, de acuerdo con el Informe Anual sobre derechos humanos para el año 2005 de la Personería de Medellín, que representa al Ministerio Público en las entidades territoriales municipales, manifestó que la población total de Medellín era de 2.368.000 personas de las cuales 1.164.000, el 49.2% se encontraban en la Línea de Pobreza mientras que 282.000 personas se encontraban en la Línea de Indigencia o Pobreza Extrema.

Es de notar que, de acuerdo con la Personería de Medellín (2005), cuando los ingresos no cubren el costo de la canasta básica de consumo (alimentos, vestuarios y vivienda) se dice que se está en la línea de pobreza, mientras que cuando los ingresos no permiten pagar la canasta mínima de alimento se dice que se está en la línea de indigencia o extrema pobreza. Este informe afirma que en la ciudad de Medellín aproximadamente 1 millón de personas se colocan por debajo de la extrema pobreza (p. 70).

En el año 2011 fue aprobada por el consejo Municipal bajo decreto 1889, en la ciudad de Medellín la política pública del mínimo vital de agua potable, el mismo está dirigido a las mujeres cabezas de familia que tienen la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos y a sus padres, éstos últimos en edad avanzada y que en conjunto constituyen parte de la población vulnerable. Esta política se articula con la política del emprendimiento social. Para Moreno et al.,

(2019) estas últimas han sido un pilar para la población de mujeres, ya que a través del otorgamiento de recursos han podido mitigar las discriminaciones y la violencia hacia ellas.

Uno de los objetivos de la política pública del mínimo vital del agua potable para la ciudad de Medellín, es el de contribuir con mayor calidad de vida para el segmento de la población vulnerable de la ciudad de Medellín. De acuerdo con Jaramillo (2017), se busca surtir agua potable, de la siguiente manera hasta los 2.500 litros de agua mensuales a cada persona y prestarle también el servicio de alcantarillado. Pero, atendiendo a la clasificación del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales (SISBEN), los que están en el nivel I con la condición de que habiten en zonas urbanas, y nivel I y II si habitan en las zonas rurales de la ciudad de Medellín. De igual manera son beneficiarios aquellos que se encuentren en condición de desplazados debidamente registrados ante el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) o que se encuentren en el Sistema de información de población desplazada (SIPOD). Otra condición es que la vivienda debe contar con redes de acueducto y alcantarillado. Contar con medidor individual para registrar los consumos de agua o tener medidor comunitario y resuelto el problema de la descarga de vertimientos. Además de no tener los servicios de acueducto y alcantarillado suspendidos o cortados (Jaramillo, 2017).

A partir de la resolución número 64/292 del 28 de julio de 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que estableció “el derecho al agua potable y al saneamiento como derecho humano esencial. Fue lo que dio pie a la política del mínimo vital de agua. De acuerdo con Lugo et al., (2019), manifiesta que “se entiende por agua potable el agua cuya calidad no representa ningún riesgo significativo para la salud durante todo el tiempo de consumo” (p. 124).

En el caso de Medellín, el más alto organismo del poder jurisdiccional, la Corte Constitucional de Colombia mediante diferentes Sentencias o Fallos de Tutela, tales como la T410 de 2003 (Ciudadano Concejal municipio de Versalles, contra Alcalde, Valle del Cauca), T270 de 2007 (Mujer adulta vulnerable contra las Empresas Públicas de Medellín), T381 de 2009 (Grupo de Ciudadanos contra el Instituto Nacional de Concesiones INCO), T418 de 2010 (Ciudadanos contra municipio de Arbeláez, Cundinamarca), T717 de 2010, T714 de 2011 (Ciudadano contra el Instituto de Seguros Sociales ISS y la Alcaldía de Soledad, Atlántico) y

la sentencia T-242/13 en la cual dos mujeres (una de Bucaramanga y otra de Medellín contra sus respectivas empresas de servicios públicos) mayores cabeza de familia y en estado de indefensión, ha reiterado que el agua debe hacerse a la luz de lo preceptuado en el ordenamiento jurídico, los lineamientos establecidos por la jurisprudencia constitucional, en conjunto con las garantías contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otros, que están encaminadas a lograr que todas las personas y en especial aquellos sujetos que han sido tradicionalmente excluidos, gocen de un mínimo de agua apta para el consumo, con el cual puedan satisfacer sus necesidades básicas domiciliarias, y además se prevengan problemas de salud y en general sanitarios, (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-242 de 2013, p 1-22).

En el mismo sentido y de acuerdo con la Personería de Medellín en sus diferentes informes sobre la situación de los Derechos Humanos en la ciudad para los Años 2012:65, 2014:119, 2015:136 y en el año 2016 de acuerdo con lo reportado en el periódico el Tiempo de junio 23 de 2019, el problema del acceso al agua potable en la ciudad, se agudiza si se tiene en cuenta el número de suscriptores a los cuales por falta de pago se les suspende o desconecta el servicio de agua potable y que según datos de la Personería en el año 2012 se registraron 26.274 suscriptores desconectados, 23.289 en el año 2014, 19.101 desconectados en el año 2015 y en año 2016 según lo manifestó a el periódico El Tiempo (2019), Jorge Londoño de La Cuesta, Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín, se registraron 70.000 familias desconectadas, lo que afecta de manera significativa la implementación de la política pública del mínimo potable en la ciudad de Medellín; sin embargo, de acuerdo con el Ministerio Público en sus informes anuales, el número de hogares beneficiados con dicha política, mantuvo un sensible indicador con tendencia al alza, al registrarse para el año 2012 un total de 24.694 hogares representando 147.165 personas beneficiadas, para el año 2014 un total de 34.361 hogares con 181.261 personas beneficiadas y para el año 2015, los beneficiados por esa política llegaron a 41.148 hogares representando un total de 195.995 personas.

Se evidencia que la política pública del mínimo vital del agua potable para la ciudad de Medellín es limitada o se queda corta en su implementación, dado que es significativamente mayor el número de hogares y personas vulnerables que se encuentran por ejemplo en situación de desplazamiento forzado, en situación de calle, privados de la libertad o con los servi-

cios públicos suspendidos o cortados y a ello se adiciona haciendo parte también de la población vulnerable especialmente protegida por la normatividad nacional y el sistema interamericano de derechos humanos, los niños y niñas; las mujeres y hombres cabezas de hogar; las comunidades originarias, afro y ROM y las personas con algún tipo de capacidad disminuida las cuales, al no disponer de acceso al agua potable, ponen en riesgo su vida y su dignidad humana. En ese sentido, Restrepo y Zárate enfatizan que “la jurisprudencia ha tutelado el derecho al agua como fundamental por su conexidad con el derecho a la vida que se refiere a la dignidad humana e implica un mínimo de subsistencia”. (p. 6).

En numerosas sentencias de tutela de la Corte Constitucional de Colombia y en un significativo número de pronunciamientos la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, han reiterado que la vida y la dignidad humana de las comunidades vulnerables en Colombia pasa por el real acceso al agua limpia y al saneamiento básico, servicios públicos a cargo y bajo la responsabilidad del Estado colombiano que desde la Constitución política de 1991, Colombia se identificó y caracterizó como un Estado Social de Derecho; es decir, aquel que tiene la obligación de atender y priorizar la inversión pública social en aquellas comunidades humanas más vulnerables para aliviar el sufrimiento que les deja el desarraigo, la violencia y la falta de oportunidades.

Fundamentación teórica

En primer lugar, es pertinente tomar algunos conceptos y definiciones sobre el Estado, el Gobierno y los Modelos de Gobernanza, para desatar el debate con relación a los roles del Estado en el análisis de caso de la política pública del mínimo vital de agua potable para la ciudad de Medellín. Se empezará por reconocer que el Estado es la persona jurídica de un determinado territorio con todos sus atributos naturales, sociales y culturales, en el cual viven o sobreviven las comunidades humanas. El Estado también es, recordando a Louis Althusser (2014), la institución soportada en todos los aparatos ideológicos (la escuela, la iglesia, la estructura normativa, otros) y represivos (las fuerzas armadas, las cárceles, los tribunales, otros) propios del Estado.

Mann (1986) al referirse al “Poder despótico de la élite estatal”, afirma que es “el abanico

de acciones que la élite tiene facultad de emprender sin negociación rutinaria, institucional, con grupos de la sociedad civil” (p. 4). Por su parte, O’Donnell (2010) reflexiona en el sentido,

que el Estado sea una entidad problemática de comprender creo se debe en buena medida al hecho que cada una de sus dimensiones aparece de modos diferentes. El Estado como conjunto de burocracias, tiende a parecer *enfrente* de la sociedad. Como intento de foco de identidad colectiva, cuando se nos interpela como aquellos a los que el Estado y el Gobierno dedican sus esfuerzos tutelares, el Estado aparece *encima* de la sociedad. Como *filtro* aparece alrededor y como sistema legal, el Estado está, aunque no pocas veces cueste verlo, *adentro* de la sociedad (p. 184).

Mientras que para Iazzetta (2012), la definición clásica de Estado “proveniente de la tradición Weberiana destaca la centralización y territorialidad como dos componentes inseparables. Desde esta perspectiva es entendido como una institución que tiene el monopolio de los medios legítimos de coerción física, y sobre esa base, ejerce un dominio sobre un territorio delimitado” (p. 141). Por su parte Dahl (1989), argumenta que, “en un Estado democrático la población adquiere unas posibilidades y alcanza unas condiciones de las que carece en el supuesto estado de naturaleza. La democracia amplía la autonomía de las personas y las hace responsables (...) La democracia es el mejor proceso para alcanzar la toma de decisiones obligatorias colectivas”. (P 350).

Con relación al Estado en su acepción histórico temporal y las capacidades de sus unidades funcionales, Bertranou (2015), hacía ver que,

los fines asignados al Estado y sus unidades tienen un marco histórico-temporal de producción; no son permanentes, más allá de que puedan entenderse algunas funciones como constitutivas del Estado como tal (...) Si se considera el Estado-Nación y algunas de sus funciones básicas, sería necesario contemplar el funcionamiento de toda la institucionalidad productora de políticas, y esto incluye no sólo el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos de control extra poder (p. 41).

Por su parte, Parsons (2009) se refiere al

vínculo entre el análisis de y el análisis para el proceso de las políticas públicas, es la

forma en que ambas áreas han enfatizado el papel de la información y el conocimiento. Como tema, el análisis de las políticas ha estado, en gran medida, moldeado por una visión neo pluralista del proceso de toma de decisiones. El papel de la información es clave dentro de éste modelo. Los teóricos del proceso de las políticas públicas se concentran en la mediación y el filtrado de ideas e información, mientras que aquellos implicados en el análisis para el proceso de las políticas públicas se concentran en la relación entre la información, el conocimiento y una *mejor* toma de decisiones (p. 450).

Es de anotar que, existen diferentes modelos de gobernanza, unos clasificados como clásicos propios del concesionamiento de servicios principalmente obras públicas e implementación de servicios sociales y otros, los más recientes modelos de co-producción, donde se articulan capitales privados y públicos, como las agencias de desarrollo mixtas o lo que se conoce en Colombia, como las alianzas público-privadas.

Finalmente, desde el punto de vista teórico, la política pública sobre el Mínimo Vital de Agua Potable, se enmarca dentro del *MODELO DE ALLISON*, el cual se trata de un proceso organizacional e incremental que tiene como producto un determinado número de personas de los niveles I en la zona urbana y niveles I y II en la zona rural de Medellín con acceso al agua potable y al saneamiento básico incluyendo los cargos fijos, completamente gratis. El objetivo es desarrollar un programa que permita a la población en situación de vulnerabilidad y pobreza del municipio de Medellín, el acceso a unas cantidades básicas e indispensables de agua potable como recurso natural renovable necesario para garantizar el derecho a la vida en condiciones dignas. En el diseño de la política pública, se identificaron con claridad los principales elementos tales como *el gobierno municipal*; *el problema*, es decir, la existencia de un número significativo de familias y hogares sin el servicio de acueducto y alcantarillado o con el servicio suspendido o desconectado; *el objetivo de la política* y finalmente, *la existencia de un proceso*; es decir, la identificación de las personas, la selección y la prestación del servicio. Igualmente, en la formulación de la política pública del mínimo vital de agua potable para el municipio de Medellín, se identificaron con claridad los *principales actores*, por un lado, El Estado, las altas cortes y el municipio de Medellín a través del Concejo y la Alcaldía y por el otro lado, las personas usuarias del servicio, beneficiarias directas de la política.

Metodología

La investigación es del enfoque cuantitativo, analítico y descriptivo apoyado en información documental, dado que se aplicaron de manera aleatoria 198 encuestas del tipo estructurada, constituidas por veinticinco preguntas cerradas y el resultado de la información se sistematiza en el programa SPSS.

Para Castañeda (1994) una población finita como la de la ciudad de Medellín en el año 2020 y para un tipo de distribución normal, se aplicó la formula estadística siguiente para calcular el tamaño de la muestra:

$$n = \frac{P \times Q}{\frac{E^2 \times P \times Q}{Z^2 \times N}}$$

De donde:

n = Tamaño de la muestra.

P = La probabilidad de éxito, o que los elementos sean seleccionados = 50%

Q = La probabilidad de fracaso o que los elementos de la población no sean seleccionados = 50%

E = Error, se estima en un 5%, para un nivel de confianza del 95%.

Z = Es una constante estimada en 1,96 para una distribución poblacional normal.

N = Población de Medellín Sisbenizada en el año 2020, un total de 1.514.987 personas estimadas de acuerdo con la información tomada de “Medellíncomovamos.org”.

Desarrollando la formula estadística, se tiene que n = 198; es decir, que se aplicará ese número de encuestas.

Instrumentos

Como instrumento principal para capturar la información primaria, en el año 2019 se aplica

aleatoriamente un total de 198 encuestas cerradas y entre las preguntas formuladas se encontraron las siguientes:

¿Usted o su familia, tiene SISBEN?; ¿En qué nivel del SISBEN se encuentra?; Incluyéndolo a usted, ¿cuántas personas constituyen su núcleo familiar?; ¿Cuánto hace que vive usted en el sector?; ¿Su vivienda dispone de un medidor o contador del servicio de acueducto?; ¿Su vivienda dispone de redes o tubería de acueducto y alcantarillado?; ¿Su vivienda dispone de agua potable?; Si su vivienda dispone de agua potable, ¿alguna vez le han “suspendido o cortado el servicio”?; Si su vivienda no dispone de agua potable, ¿cuánto tiempo lleva usted y su familia sin ese líquido vital?; Si su vivienda no dispone de agua potable, ¿cómo hace usted y su familia para poder resolver la falta de agua?; ¿Sabía usted que el Municipio de Medellín estableció desde el año 2011 la política sobre “el mínimo vital de agua potable para las personas del SISBEN Nivel 1 si habita en zona urbana o Nivel 1 y 2 si habita en la zona rural de Medellín?; Sabía usted que la política pública sobre el mínimo vital del agua potable para la población más pobre de Medellín, consiste en “Suministrar a cada persona 2.500 litros de agua potable cada mes a cada persona, incluyendo los cargos fijos y el servicio de alcantarillado”?; Si no dispone del servicio de agua potable, ¿estaría usted dispuesto a solicitar el ingreso al Programa Mínimo Vital de Agua Potable a la Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín?; Si no dispone del servicio de agua potable, ¿qué gestiones ha hecho ante las Empresas Públicas de Medellín, para lograr obtener el servicio de acueducto y alcantarillado? Y Si no dispone del agua potable y se ha pronunciado a través de cartas, protestas, movilizaciones, ¿qué respuesta ha recibido del municipio de Medellín o de las Empresas Públicas?

Participantes y procedimientos

Para la realización de este trabajo sobre la política pública del mínimo vital de agua potable para la ciudad de Medellín, se aplicaron como antes se dijo de manera aleatoria ciento noventa y ocho (198) encuestas del tipo estructurada constituida por veinticinco (25) preguntas, principalmente a las “amas de casa” de los siguientes diez (10) barrios de la comuna nororiental: El Pinar, Altos de Oriente, Paraíso II, Paraíso I, las Marraneras, los Manantiales, Granizal I, Santo Domingo Sabio, Manrique Oriental y Popular I; a los siguientes diez (10) barrios de la comuna noroccidental: Aures, Castilla, Robledo, San Germán, El Volador, Florencia, Las Brisas, Héctor Abad Gómez, Toscana y Tejelo y a los siguientes cinco (5) barrios de la comuna 16: Zafra,

Las Violetas, Rincón, La Hondonada y aguas frías, pertenecientes a la ciudad de Medellín.

Discusión de resultados

La aguda problemática por la que atraviesan miles de personas en Colombia y de manera específica en la ciudad de Medellín, por la falta de acceso al agua potable, no logró ser resuelta totalmente por la política pública del mínimo vital de agua potable implementada desde el año 2012 entre otras razones, porque no todas las personas, ni sus hogares, ranchos o viviendas ubicados en zonas de “invasión” y de “alto riesgo” disponen siquiera de redes de acueducto y alcantarillado, ni mucho menos tienen “medidor individual” de agua, simple y llanamente porque nunca han tenido acceso al agua potable.

La situación es más dramática en el contexto nacional dada la situación de guerra y conflicto armado que ha vivido Colombia desde hace más de sesenta años, y que ha producido entre otras graves problemáticas, el desplazamiento forzado de personas y familias enteras incluyendo comunidades originarias las cuales, en la mayoría de los casos, no han tenido acceso al agua potable. De acuerdo con el registro único de víctimas RUV desde 1991 hasta el 2015, se habían registrado diez millones seiscientos trece mil cientos cuarenta y dos (10.613.142) personas víctimas del conflicto armado de las cuáles al 31 de diciembre de 2017 se contabilizaron seis millones quinientos mil (6.500.000) personas desplazadas y al 31 de mayo de 2020 más de tres años después de haberse firmado el Tratado de Paz entre el Estado Colombiano y la insurgencia social armada representada en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, el número de personas desplazadas había llegado a los ocho millones treinta y seis mil catorce (8.036.014) personas.

Con relación a las condiciones de vida, y por lo tanto al acceso al agua potable de la población desplazada, el Ministerio Público Colombiano en su versión la Personería Municipal de Medellín en su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos realizó entre otros un estudio donde la Personería adelantó una encuesta para determinar algunas variables como el tiempo del desplazamiento, número de veces en que se ha producido, e información sobre las condiciones del asentamiento (p. 23).

Obtuvieron como resultado frente a los ingresos y su procedencia que el 60% de las familias no cuenta con ingresos, subsisten de lo que ellos llaman “el recorrido”, que significa salir a pedir limosna y víveres. Por otro lado, el 25% tiene ingresos trabajando de manera eventual y por días, que oscilan entre los \$180.000 y \$300.000 mensuales, mientras que el 15% restante trabaja ocasionalmente y consiguen menos de \$100.000 mensuales.

De estos resultados se da cuenta de la situación de vulnerabilidad en que viven estas personas, un elevado porcentaje no logra acceder al salario mínimo, lo que les lleva a trabajar en el mercado informal, es decir en labores domésticos, la construcción, ventas ambulantes, recicladores y en algunos casos reciben auxilios por tercera edad.

En cuanto a los servicios públicos domiciliarios, solo un 15% de las viviendas encuestadas cuenta con agua potable suministrada por las empresas públicas de Medellín, al 85% restante se le suministra agua por la Junta de Vivienda comunitaria, generalmente de un nacimiento natural utilizando mangueras que la conducen hasta las casas, pagando en promedio \$4.000 mensuales. (p25) por su parte, en cuanto al servicio sanitario en el 95% de las viviendas cuentan con letrina, mientras que el 50% con una taza, el 45% sin ella, en el 25% el servicio queda por fuera de la vivienda y en el 5% consiste en un hueco que desemboca en la quebrada más cercana. (p 24).

El estudio de la Personería de Medellín evidencia las precarias condiciones en que sobrevive la población desplazada por el conflicto armado del que se destaca que el 60% de las familias no tienen ingresos y sólo el 15% cuenta con agua potable suministrada por las Empresas Públicas de Medellín. De acuerdo con Lugo et al., (2019),

la población más vulnerable tanto física como socioeconómicamente son los más afectados por microorganismos patógenos transmitidos por el agua. Las personas se pueden infectar con estos agentes si consumen el agua directa o indirectamente a través del uso del agua contaminada para lavar ropa, utensilios de cocina, bañarse o inclusive cocinar. (p. 124).

Análisis de datos

De los resultados del trabajo de campo, se desprende la información siguiente de carácter estadístico. Con relación a la pregunta sobre si la familia tiene SISBEN, se encontró que el 82% lo tiene mientras que el 18% restante, no tiene ese beneficio; de las familias Sisbenizados, el 61% se encuentran clasificadas en el nivel I, el 22% en el nivel II y el 17% en el nivel III; lo que significa que el 83% de la muestra poblacional encuestada, cumple una de las condiciones para ser beneficiario de la política sobre el mínimo vital de agua potable.

Con respecto a la conformación de la estructura familiar, se encontró que el 48% de las familias están constituidas por grupos de 3 a 6 personas, el 37% por grupos de 1 a 3 personas y el 15% del núcleo familiar está constituido por más de 6 personas. Así mismo, con relación a la permanencia en el sector, se encontró que el 32% de las personas llevan viviendo de 1 a 3 años, el 28% tienen más de 6 años viviendo en el sector, el 25% llevan de 3 a 6 años y finalmente, sólo el 15% de los encuestados llevan menos de 1 año viviendo en el sector, objeto de análisis.

Con relación a si la vivienda cuenta con un medidor de agua, se encontró que sólo el 33% de las familias dicen que sí, mientras que el 67% afirman que sus viviendas no cuentan con medidor de agua. De la misma manera, se encontró que sólo el 38% de las viviendas cuentan con redes de tubería de acueducto o alcantarillado, mientras que la mayoría de las viviendas, el 62%, no cuentan con esas redes, lo que significa, que la mayoría de la población objeto de estudio, no podría acceder a la política pública del mínimo vital de agua potable. En el mismo sentido, se comportó el indicador con relación a las viviendas que cuentan con agua potable, sólo el 38% tiene acceso al preciado líquido, mientras que la gran mayoría de hogares, el 62% carecen de acceso al líquido vital. Aquí es necesario destacar que de las pocas familias que disponen de agua potable, al 65% le han suspendido o cortado el servicio por falta de pago.

El estudio también encontró que de la mayoría de los hogares que no dispone de agua potable (67%), el 43% lleva más de 6 años sin acceso a ese preciado líquido, el 30% lleva entre 3 y 6 años y el 27% lleva entre 1 y 3 años sin agua potable. Es de observar que del total de familias que viven sin agua potable, el 43% toman el agua contaminada directamente de alguna quebrada cercana al lugar de vivienda, el 33% la toman de un nacimiento igualmente sin tratar y el 24% toman el agua de algún pozo de los existentes en el territorio. De ahí los problemas de salud pública encontrados por el Grupo de Epidemiología de la Universidad de Antioquia,

citados más arriba de este informe.

También se encontró que la mayoría de la población analizada, el 68% desconoce la existencia de la política pública relacionada con el mínimo vital de agua potable, sin embargo, el 100% de la población encuestada, estaría dispuesta a solicitar el ingreso al programa mínimo vital de agua potable a través de la Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín.

Finalmente, es necesario destacar que las familias que no disponen de agua potable han gestionado ante las Empresas Públicas de Medellín, interponiendo diferentes recursos jurídicos como el derecho de petición el 22% de las familias, la acción de tutela, también el 22%, la acción de grupo o popular, el 20% de las familias y la gran mayoría, el 36% han optado por la movilización y protesta por las principales vías del sector. A las diferentes acciones impetradas por la ciudadanía en el 78% de los casos, las empresas públicas de Medellín no se han dignado dar alguna respuesta, mientras que para el 22% de los casos, se ha dado respuesta escrita, pero nada más.

Conclusión

Con relación al contexto del Estado colombiano en sus diferentes órdenes y niveles, Medellín es la entidad territorial pionera en el intento de la implementación de la Observación General N° 15 de 2002 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sino en el desarrollo de la Resolución N° 64/292 de 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relacionada con el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico o lo que es lo mismo, el acceso al agua potable y a condiciones de vida dignas para las comunidades más vulnerables; sin embargo, el estudio ha podido evidenciar las dos principales limitantes de la política pública del mínimo vital de agua potable que impiden el acceso real a ese preciado líquido para la mayoría de la población vulnerable de la ciudad de Medellín, se trata de los requisitos de “estar a paz y salvo para con las empresas públicas de Medellín y tener redes de acueducto y alcantarillado conectadas a la vivienda”.

Para el caso de Medellín y las principales ciudades de Colombia, es un absurdo limitar el acceso al agua potable para la mayoría de las comunidades vulnerables, que son precisamente

las que no cuentan siquiera con una vivienda digna y por lo tanto, con redes de acueducto y alcantarillado, máxime que un significativo número de esas personas son población desplazada, víctima de la violencia, mujeres mayores cabeza de familia, o población raizal, étnica, ROM o Afro, históricamente olvidadas, ajenas a los beneficios de las políticas públicas y en situación de abandono.

Referencias

- Althusser, L. (2014). *Ideología y aparatos ideológicos del Estado*. Editorial Quinto Sol. URL: <https://www.buscalibre.com.co/libro-ideologia-y-aparatos-ideologicos-del-estado-louis-althusser-quinto-sol/9789686620405/p/4533192>
- Bertranou, J. (2015). *Capacidad estatal: Revisión del concepto y algunos ejes de análisis y debate*. Revista Estado y Políticas Públicas N° 4, pp 37-59. URL: https://revista270ypp.flacso.org.ar/files/revistas/1433485077_dossier-2.pdf
- Castañeda, M. (2015). (compiladora). *Observación General N° 15. El derecho al agua. Artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. En: Compilación de Tratados y Observaciones generales del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, pp. 107-121. URL: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r34177.pdf>
- Dahl, R. (1992). *La democracia y sus críticos*. En: REIS 79/97. Crítica de Libros, pp. 347-388. URL: http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_079_14.pdf
- Iazzetta, O. (2012). *5.Capacidades Estatales y Crisis Global. Apuntes para América Latina*. En: Antonio Aranibar Arze, Federico Vásquez Calero. (Coord.). Cuadernos de prospectiva política 2. Crisis global y democracia en América Latina. Siglo veintiuno editores, pp 137-162.
- Jaramillo, P. (2017). *Ponencia en XII Congreso Iberoamericano de Municipalistas sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS*. En: Anuario de Investigación ¡Educación para vivir

mejor!, enero-diciembre de 2017, año 8, N° 8 pp. 252-253.

Lugo, J.; Lugo, E.; Vargas, S.; Landázuri, L.; Castro, J. (2019). *Evaluación de la calidad microbiológica de agua potable de dos pueblos palafíticos de la Ciénaga Grande de Santa Marta*. En: Y. Chirinos., A. Ramírez., J. Luna, N. Barbera y D. Rojas, (Coord.) *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica.*, 6 (8), 122 – 133. Coro. Venezuela. Fondo Editorial Servando Garcés.

Mann, M. (1986). *El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados*. En: Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas. Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, pp. 55-82. URL: http://politicasyplanificacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/121/2014/07/Unidad1_Teorico_Mann.pdf

Martínez, C. (1994). *Estadística y Muestreo*. ECOE Ediciones.

Moreno, M.; Georges, M.; Fariás, Z. (2019). *Políticas públicas de emprendimiento social como mecanismo de inclusión de las mujeres en América Latina*. En: Y. Chirinos., A. García., R. Godínez, N. Barbera y D. Rojas, (Coord.) *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica.*, 7 (7), 37 – 56. Coro. Venezuela. Fondo Editorial Servando Garcés.

Municipio de Medellín. Personería Municipal. (2005). *Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Medellín*. URL: <http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/informacion-al-ciudadano/documentos/informes-derechos-humanos-ddhh/category/30-informes-ddhh-2005>

Municipio de Medellín. Personería Municipal. (2012). *Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Medellín*. URL: <http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/informacion-al-ciudadano/documentos/informes-derechos-humanos-ddhh/category/35-informes-ddhh-2012>

Municipio de Medellín. Personería Municipal. (2014). *Informe sobre la Situación de Derechos*

Humanos en Medellín. URL: <http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/informacion-al-ciudadano/documentos/informes-derechos-humanos-ddhh/category/37-informes-ddhh-2014>

Municipio de Medellín. Personería Municipal. (2015). *Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Medellín*. URL: <http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/informacion-al-ciudadano/documentos/informes-derechos-humanos-ddhh/category/37-informes-ddhh-2014>

Municipio de Medellín. (2011). *Decreto de la Alcaldía N° 1889*.

Organización de las Naciones Unidas. (2010). Asamblea General. *Resolución N° 64/292, aprobada por la Asamblea General el 28 de Julio de 2010. El derecho humano al agua y al saneamiento*. URL: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S

O'Donnell, G. (2010). *Democracia, agencia y Estado: Teoría con intención comparativa*. Editorial Prometeo.

Parsons, W. (2009). *Políticas Públicas: Una introducción a la teoría y a la práctica del análisis de políticas públicas*. FLACSO.

Periódico El Tiempo. (2019). *Jorge Londoño de La Cuesta, Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín, informa que 70.000 personas están desconectadas del servicio de acueducto*. Junio 23 de 2019.

Republica de Colombia. (2015). *Constitución Política de Colombia. Actualizada con los actos legislativos a 2015*. Imprenta Nacional. URL: <https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf>

República de Colombia, corte constitucional. (2003). *Sentencia 410/2003*. URL: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-410-03.htm>

República de Colombia, corte constitucional. (2007). *Sentencia 270/2007*. URL: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-270-07.htm>

República de Colombia, corte constitucional. (2009). *Sentencia 381/2009*. URL: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-381-09.htm>

República de Colombia, corte constitucional. (2010). *Sentencia 418/2010*. URL: <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-418-10.htm>

República de Colombia, corte constitucional. (2010). *Sentencia 717/2010*. URL: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-717-10.htm>

República de Colombia, corte constitucional. (2011). *Sentencia 714/2011*. URL: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-714-11.htm>

República de Colombia, corte constitucional. (2011). *Sentencia 740/2011*. URL: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-740-11.htm>

República de Colombia, corte constitucional. (2013). *Sentencia 242/2013*. URL: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-242-13.htm>

República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Consejo Nacional de Política Económica y Social. CONPES Social N° 91. (2005). *Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos del Milenio 2015*. 14 de marzo de 2005. URL: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/91.pdf>

República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES. N° 117. (2008). *Actualización de los criterios para la determinación, identificación y selección de beneficiarios de programas sociales*. URL: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/117.pdf>

República de Colombia, Congreso de la República. (2007). *Ley 1176*. Imprenta Nacional.

Restrepo, E.; Zárate, C. (2016). *El mínimo vital de agua potable en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana* 740a. En: Opinión Jurídica, Vol. 15, N° 29, enero-junio de 2016, pp 123-140.

Enlaces

<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/victimas-en-el-exterior/mas-de-un-millon-y-medio-de-victimas-de-desplazamiento-en-colombia-han>
<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/valoracion-y-registro/el-registro-unico-de-victimas-del-gobierno-de-colombia-y-el-observatorio>
<https://www.unidadvictimas.gov.co>
<https://www.medellincomovamos.org>